Proposición con punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en uso de sus facultades, separe del cargo al C. Tomás Zerón de Lucio, Titular de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de garantizar la imparcialidad de las investigaciones que realizan la Visitaduría General y el Órgano de Control Interno de esa dependencia, por la presunta alteración y manipulación de las investigaciones en el caso de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio en nuestra calidad de Diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, fueron atacados los estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, cuando realizaban una “toma” de autobuses y un “boteo” para juntar recursos para trasladarse el día 2 de octubre a la Ciudad de México, para la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

Durante el ataque, 43 jóvenes estudiantes sufrieron desaparición, continuando hasta la actualidad en calidad de desaparecidos; fueron asesinadas 6 personas, 3 estudiantes de la normal y 3 más del equipo de segunda división “Los Avispones”, 17 alumnos resultaron lesionados, y además sufrieron violación a los derechos humanos más de 100 personas.

Cabe señalar que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fueron monitoreados en todo momento, desde su salida de la escuela en municipio de Tixtla, Guerrero, hasta el momento de los ataques, a través del sistema de cámaras de seguridad denominado C4, Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, donde participan representantes de los tres niveles de gobierno, policías municipales, estatales de Guerrero, la Policía Federal y el Ejército Mexicano, además de integrantes de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero.

Esa misma noche, aproximadamente a las 21:30 horas del 26 de septiembre de 2014, a raíz de llamadas al C4 de Iguala por los ataques que estaban ocurriendo, la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa número AC/PGR/GRO/IGU/I/256/2014, por “violación a ley federal de armas de fuego y explosivos”. De estos hechos fue inmediatamente informado Miguel Amelio Gómez, delegado de la PGR en Guerrero, y expresamente en el documento redactado por el agente del Ministerio Público César Iván Pilares, quien ordenó hacer una “minuciosa y exhaustiva investigación”, se señala lo siguiente:

“La presente indagatoria se inició por haberse recibido en esta agencia investigadora una llamada telefónica por parte del C4, en la cual manifestaban que al parecer, aún sin confirmar, alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses, los cuales se encuentran en las calles Galeana y Mina de esta ciudad”.

En el día referido, los agentes de la Policía Ministerial (P. M.) Romeo Ortíz Valencia, José Manuel Dirzo Correa y Enrique Ramírez Hernández, este último encargado de la subsele de la P.M. de Iguala, salieron a las calles de aquel municipio a verificar lo que estaba pasando.

SEGUNDO.- A pesar de que la indagatoria fue levantada por delitos del fuero federal, no fue sino hasta 8 días después de los hechos, el 4 de octubre de 2014, cuando Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), junto con Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia Criminal de Investigación, hicieron el anuncio oficial de que la PGR ejercía la facultad de atracción de esta indagatoria.

Tomás Zerón informó en esa ocasión, que personal pericial se trasladaría a Iguala para realizar los peritajes necesarios para la identificación de los restos ubicados en varias fosas clandestinas localizadas, y en las que se presumía podrían encontrarse los restos de los estudiantes normalistas. Es decir, desde un inicio, la investigación se centró en buscar los restos de los normalistas, sin intencionalidad aparente de iniciar, como se debía, líneas de investigación dentro de las cuales se buscara con vida a los estudiantes.

Pero además, durante 19 meses, representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto han dicho que no pudieron intervenir ni investigar de inmediato los hechos porque no eran de su competencia, y sin embargo, el documento anteriormente referido demuestra lo contrario: que desde el primer momento tuvo participación la PGR.

TERCERO.- El pasado 24 de marzo de 2016, **Carlos Beristain**, uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, mostró un video que documenta una diligencia hecha en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, en la que se observa la participación de Tomás Zerón y personal de la PGR un día antes de que se reportara el hallazgo de la única muestra que está ligada genéticamente de forma indubitable a uno de los normalistas, misma que ha sido usada desde ese entonces como argumento para sustentar la hipótesis de la llamada “Verdad histórica”: que todos los 43 estudiantes normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Esto es particularmente grave, porque la diligencia mencionada, al haberse realizado pero no estar consignada en el expediente del Caso Ayotzinapa, evidencia, por lo menos, omisiones graves que ponen en riesgo la propia investigación, y que en sí mismas pudieron desviar el sentido de la ésta, sobre todo en lo que toca al esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes, situación que debe de ser investigada.

Las imágenes mostradas por el GIEI también muestran la presencia de uno de los detenidos, quien es llevado hasta el lugar. Además, se observa que peritos de la PGR recogieron “muestras óseas”, hecho que tampoco es mencionado en el expediente.

De lo anterior, podría suponerse que la **Procuraduría General de la República** ocultó informar y consignar en el expediente el hecho de que un día antes de reportar el hallazgo de los supuestos restos óseos del normalista **Alexander Mora**, uno de los 43 desaparecidos, elementos de esa dependencia estuvieron en ese mismo lugar, junto con buzos de la Marina.

Cabe señalar que el GIEI apuntó que debido a este operativo no reportado, de manera oficial hubo un bloqueo del camino, por el que incluso se quedaron parados algunos miembros del **Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)**, quienes bajaban del basurero de Cocula, donde tomaban muestras, sin que se les informara que se estaba llevado a cabo una diligencia en el río San Juan.

Cuando el **Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)** presentó su propio informe, denunció que **ninguno de sus integrantes estuvo presente en el momento en que se encontró la bolsa con restos óseos del normalista de Ayotzinapa**, y que según la PGR fue encontrada en el río San Juan. Este hecho, en sí mismo, apunta varias anomalías.

CUARTO.- Estos hechos son muy preocupantes y representan un problema serio que debe ser investigado por la misma Procuraduría General de la República, en razón de que el principal implicado y señalado por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como el responsable de la diligencia mantenida en secreto es Tomas Zerón, actual director de la Agencia de Investigación Criminal. Por lo que, de ser ciertas estas acusaciones, estaríamos frente a la comisión de delitos, presuntamente cometidos por aquellos quienes tienen la encomienda de investigar tan terrible crimen.

El Código Penal Federal establece que si un servidor público rinde informes falsos comete el delito de “ejercicio indebido de servicio público”, pudiendo ser sancionado con penas que van de los dos hasta los siete años en prisión:

“Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:

...

V.- Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos, y

Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”

QUINTO.-De acuerdo con la información proporcionada por el GIEI, y de ser ciertos los datos, en el mejor de los casos estaríamos ante“inconsistencias” en la investigación, que se pueden traducir en negligencia, pero lo relevante es que esto ha impedido que, de enero de 2015 a la fecha, se continúe con la búsqueda de los estudiantes.

Concretamente el Código Penal Federal dice al respecto:

“Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

[...]

VIII. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia;

[...]

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXXIII y XXXIV, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa”.

SEXTO.- Por todo lo expuesto, sin embargo, pareciera que hay más que negligencia en la investigación del Caso Ayotzinapa, puesto que sucede que los responsables de las diligencias, lejos de cuidar las indagatorias en lo que ellos mismos han calificado como “el caso más importante de la historia de México”, y donde precisamente por eso debería imperar la pulcritud jurídica y la transparencia de las actuaciones de la autoridad encargada de procurar justicia, se hace exactamente todo lo contrario.

De hecho, precisamente por eso, con fecha 27 de abril de 2016, la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, dio vista de este asunto a la Visitaduría General para que, en pleno ejercicio de sus atribuciones, “proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes”.

De igual forma, se dio vista al Órgano Interno de Control de la PGR, para determinar si la actuación de Zerón de Lucio es contraria al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Ante los hechos aquí descritos, las acciones de la PGR resultan claramente insuficientes, toda vez que Tomás Zerón, tiene a su cargo en la actualidad a la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales, y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, lo que lo hace indudablemente un hombre con Poder, dentro y fuera de la PGR.

En estas condiciones, cualquier investigación que se realice al interior de la PGR, mientras Tomas Zerón ejerza ese cargo dentro de la institución, no podrá ser imparcial ni resultará creíble, además de que de mantenerse en el estado que guardan actualmente, resultarían ofensivas para los padres de las víctimas y para la opinión pública.

Lo anterior resulta aún más relevante, si asumimos que algunos de los objetivos primordiales son el salvaguardar la indagatoria, conocer la Verdad y hacer Justicia, y no resguardar a un funcionario alguno, en este caso, al titular del órgano desconcentrado Agencia de Investigación Criminal. Es un hecho que la credibilidad de la investigación está dañada y que no podrá restaurarse en tanto siga ahí quien es investigado por alterar la indagatoria.

En suma, estamos frente a un claro y evidente conflicto de intereses, mismo que no puede prevalecer, y más mientras siga desempeñándose como Titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón.

SÉPTIMO.- Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley orgánica de la Procuraduría General de la Republica, el Procurador ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la PGR.

En el artículo 19 del mismo ordenamiento se establece además, que “Los coordinadores, **titulares de unidad y de órganos desconcentrados** (como lo es la Agencia de Investigación Criminal), directores generales, delegados y agregados deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables, **serán designados y removidos libremente por el Procurador General de la República**”. Por lo anterior, la PGR está obligada constitucional y legalmente a ejercer sus atribuciones, respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común, y cesar inmediatamente del ejercicio de sus funciones a Tomás Zerón, quien a todas luces trasgrede lo establecido en el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, que claramente señalan que la actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría General de la Republica, para que en uso de sus facultades separe del cargo al C. Tomás Zerón de Lucio, Titular de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de garantizar la imparcialidad de las investigaciones que realizan la Visitaduría General y el Órgano de Control Interno de esa dependencia, por la presunta alteración y manipulación de las investigaciones en el caso de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.

DIP. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ

DIP. JUAN ROMERO TENORIO

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de Mayo de 2016.

Proceso 2061/ 1 de mayo de 2016 página 11. <http://ow.ly/4nhMfk>

<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/04/atrac-pgr-investigacion-de-los-43-normalistas-desaparecidos-en-iguala-3218.html>

Aristegui noticias mayo 2 de 2016, <http://aristeguinoticias.com/2404/mexico/oculto-pgr-que-estuvo-un-dia-antes-en-lugar-donde-encontraron-restos-giei/>